

## **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**

Medellín, tres (3) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

### **SENTENCIA**

**Proceso** : Ordinario de Segunda Instancia  
**Demandante** : **KARIN ROSELLY MARIN JIMENEZ**  
**Demandados** : **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍA**  
**Llamada en garantía** : **MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.**  
**Radicado** : **05001 31 05 016 2019 00496 01**  
**Providencia** : Sentencia  
**Temas y Subtemas** : Seguridad Social – pensión invalidez de origen común, capacidad laboral residual  
**Decisión** : Confirma Decisión absolutoria  
**Sentencia No** : 11

En la fecha antes anotada el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**,<sup>1</sup> profieren la siguiente decisión de fondo, previa deliberación, de conformidad con lo establecido en la **Ley 2213 del 13 de junio de 2022**<sup>2</sup>, que modificó el trámite en los procesos de la jurisdicción Laboral.

### **ANTECEDENTES**

#### **Pretensiones:**

Solicita se condene a la demandada al pago de la pensión de invalidez a partir del 20 de septiembre de 2018 de manera

---

<sup>1</sup> Conformada por las Magistradas **NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR**, **LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL** y **MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**, como ponente.

<sup>2</sup> “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del decreto legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras

vitalicia teniendo en cuenta los incrementos de ley, intereses moratorios o en subsidio indexación, condenas ultra y extra petita, costas procesales.

### **Hechos relevantes de la demanda:**

Se afirma que la demandante desde el año 2011 presenta problemas renales; el 20 de septiembre de 2018 SEGUROS BOLIVAR S.A. le determinó una Pérdida de Capacidad Laboral de 72.65% estructurada el 4 de marzo de 2016; cotizó un total de 168.57 semanas; solicitó la pensión de invalidez y como respuesta, le informaron que se le realizaría la devolución de saldos.

### **Respuesta a la demanda:**

**COLFONDOS S.A.** a través de apoderada judicial, explica que la señora KARIN ROSELLY MARÍN JIMENEZ reporta desde el 4 de marzo de 2013 al 4 de marzo de 2016, 22.57 semanas, sin cumplir con el requisito de tener 50 semanas en los tres años anteriores a la invalidez. Se opone a las pretensiones de la demanda y formuló las excepciones que denomina inexistencia de la obligación, falta de causa en las pretensiones de la demanda y falta de acreditación de los requisitos legales para reconocer la pensión de invalidez, cobro de lo no debido, enriquecimiento sin causa, no configuración del derecho al pago de intereses moratorios, buena fe, innominada o genérica, compensación y pago, prescripción.

### **Llamamiento en garantía:**

COLFONDOS S.A., solicitó llamar en garantía a MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., argumentando que suscribió con la misma póliza previsional donde se comprometió a pagarle la suma adicional requerida para financiar el capital necesario que permita el pago de la pensión de invalidez.

**Una vez notificada, la sociedad MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., dio respuesta a través de apoderada judicial,** indicando que la demandante no tiene la densidad de cotizaciones requeridas por la norma para acceder a la pensión de invalidez; conforme la fecha de estructuración de la Pérdida de Capacidad Laboral de la demandante, el evento se encuentra por fuera de la vigencia y cobertura de la póliza que expidió. Se opone a las pretensiones de la demanda, formulando las excepciones que denomina falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de derecho en favor de la demandante, inexistencia de obligación, falta de título y causa, inexistencia de exigibilidad de la obligación, inexistencia de causa para el reconocimiento de intereses moratorios, buena fe, prescripción, genérica o innominada. Se opone a las pretensiones del llamamiento en garantía y formula las excepciones denominadas evento no amparado, evento por fuera de vigencia de la póliza, ausencia de reclamación, inexigibilidad de la obligación y ausencia de mora, excepción del contrato no cumplido y ausencia de mora, límite del valor asegurado, improcedencia de reconocimiento de intereses moratorios, indexación y costas, prescripción, genérica o innominada.

#### **Sentencia de Primera Instancia:**

El **Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín,** mediante Sentencia del 24 de marzo de 2022, **negó todas las**

**pretensiones incoadas por la demandante;** declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación propuesta por COLFONDOS S.A.; negó las pretensiones del llamamiento en garantía, declarando probada la excepción de inexistencia de la obligación; condenó en costas a la demandante en favor de COLFONDOS S.A., fijando como agencias en derecho la suma de \$1.000.000; condenó a COLFONDOS S.A. en favor de la llamada en garantía MAPFRE S.A. fijando como agencias en derecho la suma de \$1.000.000.

Lo anterior considerando que entre el 4 de marzo de 2013 y 4 de marzo de 2016, es decir dentro de los tres años anteriores, solo cotizó 22.57 semanas; el dictamen no dice expresamente que la patología sea degenerativa; la demandante fue incapacitada para laborar desde febrero hasta agosto de 2016 en forma continua, lo que quiere decir que su estado de salud no le permitió continuar laborando, incluso desde antes que se estructuró la PCL; se concluye que no tenía capacidad de mantenerse en el mercado laboral realizando cotizaciones; **no es dable considerar una fecha diferente a la del 4 de marzo de 2016 para efectos del cómputo de semanas al no demostrarse que las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración sean producto de una efectiva y probada capacidad laboral residual.**

**Recurso de Apelación apoderado de la demandante:**

Solicita se revoque la Sentencia de Primera Instancia y en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda, afirmando que **lo que se está alegando es la fuerza laboral residual y no la fecha de estructuración que puede ser determinada al momento en que se califica dicho estado, cuando se solicita la pensión o incluso con la última cotización.** Para el momento en

que la demandante fue calificada y para la fecha en la que le fue determinada la estructuración de la invalidez, se encontraba laborando sin que se piense defraudar al sistema; a pesar de estar enferma, tenía la posibilidad de seguir laborando y cotizando, aunque fue solo en el año 2018 cuando logró que le calificaran la Pérdida de Capacidad Laboral.

### **Alegatos de conclusión:**

Los apoderados de las partes y la llamada en garantía reiteran los argumentos expuestos en Primera Instancia.

Es así como, agotado el trámite procesal correspondiente a este tipo de procesos y sin que se aprecie causal alguna de nulidad que invalide la actuación, se procede a resolver el asunto de fondo, previas las siguientes,

## **CONSIDERACIONES**

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación; de conformidad con lo establecido en los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, 15 y 66 A del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, respectivamente.

### **Conflicto Jurídico:**

**El asunto jurídico a dirimir, radica en verificar si es procedente revocar la Sentencia de Primera Instancia, analizándose si las cotizaciones al Sistema de Pensiones en**

**forma posterior a la fecha de estructuración de la invalidez son producto de la capacidad laboral residual de la demandante resultando válidas para acreditar la densidad de semanas exigida para acceder a la pensión de invalidez.**

**Encontrando esta Sala de Decisión Laboral procedente, confirmar la decisión de Primera Instancia;** por las siguientes razones:

**No es objeto de discusión** que la Compañía de Seguros Bolívar S.A. **mediante dictamen del 20 de septiembre de 2018 le determinó a la señora Karin Roselly Marín Jiménez una Pérdida de Capacidad Laboral del 72.65% de origen común, estructurada el 4 de marzo de 2016,** valorándose los diagnósticos *Hipertensión secundaria a otros trastornos renales, insuficiencia renal terminal, Lupus eritematoso sistémico con compromiso de órganos o sistemas;* así mismo, **establece que se trata de una enfermedad catastrófica y progresiva** (folios 21 a 27 archivo 01); según la historia laboral obrante en el proceso, **cuenta con 168,57 semanas cotizadas** entre los periodos de octubre de 2006 a agosto de 2018 (folios 30 a 32 archivo 01); la demandante solicitó la pensión de invalidez, frente a la cual se le dio respuesta el 5 de marzo de 2019 aprobando la devolución de saldos, **informándosele sobre el no cumplimiento del requisito de haber cotizado 50 semanas en los tres años anteriores “a la fecha de adquisición del derecho”** (folio 28 archivo 01).

De conformidad con el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, se considera inválida la persona que hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral; requisito acreditado por la demandante. Dado que la fecha de estructuración de la invalidez define la norma aplicable, así como el parámetro para contabilizar las semanas requeridas por la ley, la disposición que gobierna

este caso se encuentra en el artículo 69 de la Ley 100 de 1993 que remite al artículo 39 ibídem modificado por el artículo 1° de la Ley 860 de 2003, según el cual, la demandante, para poder acceder a la pensión de invalidez, debe tener cotizadas 50 semanas dentro de los últimos tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración; **condición que no se cumple conforme se desprende de la historia laboral la cual muestra que en este periodo de tiempo cotizó 158 días equivalentes a 22.57 semanas.**

No obstante, **la H. Corte Constitucional en Sentencia SU 588 del 27 de octubre de 2016**, reiterada en Sentencias T-079 de 2019, T-435 de 2018, T-354 de 2018, T- 694 de 2017, entre otras, **estableció unas reglas especiales para el reconocimiento de la pensión de invalidez, respecto de personas con enfermedades congénitas, crónicas y/o degenerativas**, indicando que por ser enfermedades de larga duración y progresivas, pueden darse casos de **personas que no acreditan las semanas requeridas por la norma, pese a contar con un número importante de cotizaciones realizadas con posterioridad a la fecha asignada**; señalando que dichas semanas deben ser tenidas en cuenta con el fin de salvaguardar los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, entre otros. Explicó que en estos casos, **los efectos de la enfermedad no aparecen de manera inmediata**, sino en un tiempo prolongado, por lo que **la fuerza laboral va disminuyendo y eso permite que la persona pueda trabajar hasta que su nivel de afectación le impida desarrollar una labor**; precisó que **a la AFP le corresponde verificar que los pagos realizados después de la estructuración de la invalidez, hayan sido aportados en ejercicio de una efectiva y probada capacidad laboral residual del interesado** y que éstos **no se realizaron con el único fin de defraudar el Sistema de Seguridad Social.**

Así mismo, indicó que **la capacidad laboral residual, corresponde a la posibilidad que tiene una persona de ejercer una actividad productiva que le permita garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas, pese a las consecuencias de la enfermedad; pudiendo corresponder la fecha de estructuración con la de la calificación o la de la última cotización**, presumiéndose que fue **en ese momento cuando el padecimiento le impidió a la persona continuar activa laboralmente y proveerse por sí mismo el sustento económico.**

En **Sentencia T 202 A de 2018**, señaló que **la fecha de estructuración debe corresponder a la fecha real en que la persona dejó de trabajar, pues en los casos donde la persona padece de enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas, cuya agravación es progresiva**, la junta médica debe analizar la fecha de imposibilidad para laborar según el cuadro de salud y no la fecha del diagnóstico o del primer cuadro clínico, a menos que desde esta se advierta la condición de invalidez inmediata; **permitiendo tener en cuenta los aportes realizados en forma posterior a la fecha de estructuración, acudiendo a la figura de la capacidad laboral residual que deben ser debidamente probada**; dejando claro que le corresponde al Juez determinar el momento a partir del cual verifica el cumplimiento de las exigencias de la Ley 860 de 2003, lo que no significa que está habilitado para modificar la fecha de estructuración, al haber sido definida por autoridad médica competente.

Postura que ha acogido también la **Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia**, por ejemplo en **Sentencia SL1172-2022** Radicado 87758, reiterando SL5695-2021, SL770-2020 y SL3992-2019, señalando que por regla general para el reconocimiento de la pensión de invalidez, la



normativa que rige es la vigente al momento de la estructuración de la invalidez; pero que al considerar las **condiciones de especial protección** que merecen determinadas **personas**, como las **que padecen afecciones de tipo congénito, crónico, degenerativo o progresivo**, a efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos legales **es procedente atender, para el cómputo de las semanas, la calificación** sobre pérdida de capacidad laboral, **la última cotización efectuada** o la **fecha de solicitud** de reconocimiento pensional, previo análisis de la situación particular; veamos:

*“... esta Sala de la Corte ha establecido que existen determinadas situaciones en las que hay cotizaciones que resultan válidas y contables más allá de la fecha de estructuración de la invalidez, eventos especiales que deben ser cuidadosamente esclarecidos por el juez, como es el caso de las enfermedades de carácter congénito, crónico o degenerativo o, como también se ha aceptado, las que se derivan de secuelas que con el paso del tiempo afectan la salud en una magnitud más gravosa y posterior al diagnóstico primigenio del padecimiento, pero que, en uno u otro caso, permiten al afiliado mantener su fuerza de trabajo y, por tanto, continuar laborando y aportando al sistema pensional con el fin de cubrir los riesgos de invalidez, vejez o muerte ...”.*

Igualmente, ha indicado que, aunque la discapacidad laboral en este tipo de enfermedades se puede estructurar en determinada fecha, la persona puede mantener una capacidad residual de trabajo que le permite continuar activa laboralmente, con la obligación de realizar los aportes para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, siendo válidos para alcanzar el reconocimiento de la prestación (SL5023 de 2021).

**En el asunto bajo estudio**, la historia laboral reporta cotizaciones posteriores a la fecha de estructuración de la PCL – 4 de marzo de 2016-; sin embargo, **obra en el expediente certificados de incapacidades emitidos por la NUEVA EPS S.A. conforme los cuales, la demandante estuvo incapacitada de manera permanente desde el 23 de febrero de 2016 hasta el 7 de noviembre de 2018, desde el 9 de noviembre de 2018 hasta**

**el 7 de enero de 2019 y desde el 9 de enero al 7 de febrero de 2019** (folios 136 a 140 archivo 01); información que concuerda con el Dictamen de PCL cuando en la sección de Análisis y conclusiones indica: “...Afiliada de 38 años de edad, se desempeña como almacenista en ferretería. **Incapacidades médico laborales continuas desde el 23/02/2016...**” (folio 25 archivo 01).

**Del formato de solicitud de PCL radicado ante COLFONDOS S.A. el 18 de mayo de 2018** se extrae que la actora tiene una vinculación laboral vigente **con el empleador AYALA ELECTRICO en el cargo de almacenista**, donde se indicó como **fecha de ingreso 2 de diciembre de 2014 y tiempo en el cargo de cuatro años** (folio 234 archivo 01); en el documento suscrito por la demandante denominado **FORMATO OCUPACIONAL**, radicado en la misma fecha, **en la pregunta referente al tiempo ejercido en dicho cargo, diligencia como respuesta: “2 años”** (folio 243 archivo 01); **lo cual evidencia que para la fecha en la que solicitó se le calificara la PCL, si bien tenía una relación laboral vigente, no estaba desempeñando sus funciones, hecho que se corrobora con los certificados de las incapacidades médicas; sin que se aportaran elementos probatorios que permitan determinar si las cotizaciones efectuadas después de la fecha de estructuración, se causaron en ejercicio de la denominada capacidad laboral residual; aspecto que se exige probar en debida forma, pero que no quedó demostrado; más allá de la formalidad en el pago de las cotizaciones y su registro en la historia laboral, debe existir prueba de la prestación del servicio en una actividad laboral, como producto de una real capacidad residual de la demandante.**

Por lo expuesto, **no es procedente tomar como referencia la fecha del dictamen o la última cotización, a**

**efectos de acreditar la densidad de semanas exigidas en la Ley 860 de 2003, para acceder a la pensión de invalidez.**

Así las cosas, **esta Sala de Decisión Laboral encuentra procedente, confirmar la Sentencia de Primera Instancia**, que por vía de apelación se revisa, incluyendo lo relativo a la condena en Costas.

**COSTAS:**

**Se condenará en Costas en esta Segunda Instancia a cargo de la demandante, al no haber prosperado el recurso de Apelación formulado**, fijándose como agencias en derecho la suma de \$300.000 en favor de COLFONDOS S.A.; conforme a lo establecido en el artículo 365 del Código General del Proceso y el Acuerdo 10554 de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

**DECISIÓN:**

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

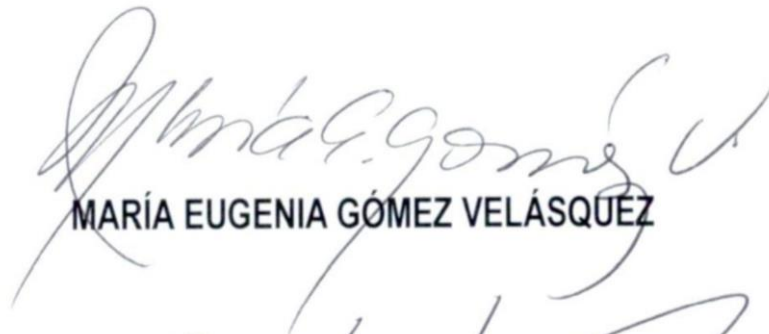
**RESUELVE**

**PRIMERO:** Se **CONFIRMA**, la Sentencia de Primera Instancia, de fecha y procedencia conocidas, que por vía de Apelación se revisa, incluyendo lo relativo a la condena en Costas; de conformidad con lo explicado en la parte considerativa de esta Sentencia.

**SEGUNDO:** Se condena en **Costas en esta Segunda Instancia** a cargo de la demandante, fijándose como agencias en derecho la suma de \$300.000 en favor de COLFONDOS S.A.; según lo indicado en la parte motiva.

**TERCERO:** Lo resuelto se notifica por **EDICTO**, en el término de un (1) día; se ordena devolver el proceso al Despacho de origen. En constancia se firma el Acta por quienes en ella intervinieron.

**Las Magistradas,**



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR

En permiso

LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL



**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  
SECRETARIA SALA LABORAL  
EDICTO VIRTUAL**

**HACE SABER:**

**Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:**

**Proceso** : Ordinario de Segunda Instancia  
**Demandante** : **KARIN ROSELLY MARIN JIMENEZ**  
**Demandados** : **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍA**  
**Llamada en garantía** : **MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.**  
**Radicado** : **05001 31 05 016 2019 00496 01**  
**Providencia** : Sentencia  
**Temas y Subtemas** : Seguridad Social – pensión invalidez de origen común, capacidad laboral residual  
**Decisión** : Confirma Decisión absolutoria  
**Sentencia No** : 11

**FECHA SENTENCIA:**

3 de febrero de 2023

**CONSTANCIA DE FIJACIÓN**

**CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN**

Fijado hoy martes 07 de febrero de 2023 a las 8:00 Am Desfijado hoy martes 07 de febrero de 2023 a las 5:00 Pm

Lo anterior con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 ibídem. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del termino de fijación del edicto.

**RUBEN DARIO LÓPEZ BURGOS**  
**Secretario**